



Jacobin Mag, Tim Gill Christian Lewelling*

En los últimos meses, los legisladores estadounidenses han condenado a Facebook por dañar la salud de los niños, amplificar la violencia entre Washington e India y difundir información errónea sobre el COVID-19 y su vacuna. Estas críticas se producen tras la filtración de miles de documentos internos de la empresa, conocidos como *Facebook Papers*, que revela que si bien Facebook era plenamente consciente del papel de sus productos en el desarrollo de una serie de comportamientos tóxicos, la empresa se ha negado a tomar medidas contundentes para abordarlo, anteponiendo los beneficios a la protección de la salud.

Sin embargo, a medida que los legisladores explotan las consecuencias políticas de la filtración para intensificar sus ataques contra el gigante tecnológico, los contribuyentes también pueden encontrar interesante saber que el gobierno de EE. UU. ha financiado programas para ayudar a los partidos políticos de oposición y activistas a utilizar Facebook para socavar a gobiernos extranjeros. Venezuela es un buen ejemplo.

Después de la muerte del ex presidente socialista venezolano Hugo Chávez, el Instituto Nacional Democrático, una rama independiente del gobierno de los Estados Unidos creada para financiar y apoyar a partidos políticos en el extranjero de manera más formal que la Agencia Central de Inteligencia, financió a miembros de la oposición venezolana para que usaran las redes sociales para movilizar a sus partidarios y unir a los partidarios del gobierno socialista a su causa, para llevarlos "al otro lado". Recientemente recibimos documentos del gobierno de EE. UU. por una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) que muestran cómo el gobierno diseñó un programa centrado en el uso de Facebook para ayudar a la oposición venezolana en las elecciones municipales de 2013 y las elecciones legislativas de 2015. Estos documentos prueban: en otras palabras, que el gobierno de Estados Unidos está utilizando activamente las redes sociales para interferir con las elecciones de otros países.

La crisis de Facebook

Activistas de todo el mundo han utilizado Facebook, Twitter y otros medios en línea para enviar mensajes, organizar protestas e incluso derrocar gobiernos. Dada la importancia de Facebook en particular, ha aumentado la presión para regular la publicación de mensajes en el sitio. Los legisladores estadounidenses, por ejemplo, criticaron a la compañía por no tomar medidas contra las supuestas campañas de desinformación de Rusia destinadas a sembrar el caos e influir en las elecciones estadounidenses. Además, muchos han denunciado la incapacidad de la compañía para tomar medidas enérgicas contra los activistas pro-Trump cuando afirmaron que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas y utilizaron el sitio para organizar la rebelión del 6 de enero en Washington.

A raíz de los documentos de Facebook, los legisladores estadounidenses han revivido sus críticas al gigante tecnológico. Los documentos revelan que los ejecutivos de Facebook sabían que la "mecánica central" de su plataforma (es decir, algoritmos) lleva a los usuarios a las publicaciones más provocativas y controvertidas, lo que resulta en una serie de comportamientos socialmente tóxicos.

Por ejemplo, los documentos revelan que a pesar de la investigación interna que demuestra que la aplicación de Instagram de la compañía está dañando la autoestima de los niños, los ejecutivos de Facebook han seguido adelante con sus planes de desarrollar la compañía, una aplicación similar para niños menores de trece años, y nadie los detuvo hasta dos semanas después de que se revelaran los documentos de Facebook. También describen las crecientes preocupaciones de la administración de la empresa sobre los impactos sociales más amplios de la plataforma, que van desde la facilitación de la violencia política y la propagación de la desinformación del COVID-19 hasta su uso por parte de los carteles de la droga, traficantes de personas y grupos armados para contratar asesinos a sueldo, describen asesinatos.

Los documentos muestran que, en respuesta, los ejecutivos de Facebook favorecieron las ganancias al negarse a tomar medidas concretas, optando en cambio por tácticas de gestión al estilo de las relaciones públicas, por temor a que cambiar sus algoritmos reduciría la participación de los empleados, los usuarios y, por lo tanto, el crecimiento de la plataforma.

Esto resultó en la peor crisis política en la historia de la empresa (al menos desde Cambridge Analytica), lo que llevó a la empresa a anunciar un cambio de marca. Los legisladores demócratas y republicanos han aprovechado la crisis para castigar aún más a Facebook,

incluso mostrando apoyo bipartidista para una mayor regulación del gigante tecnológico.

La senadora Marsha Blackburn (republicana por Tennessee), por ejemplo, dijo: "Está claro que Facebook prioriza las ganancias sobre el bienestar de los niños y de todos los usuarios", mientras que el senador Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut) argumentó que esto puede haber sido la 'Gran droga del momento Facebook', refiriéndose a la indignación y luego a la disminución del tabaquismo en los Estados Unidos después de las revelaciones de las trampas de la industria para poner en duda los efectos negativos de sus productos en la salud.

Es algo divertido escuchar a los senadores estadounidenses expresar sus preocupaciones sobre la orientación de una empresa hacia la búsqueda de ganancias en una sociedad capitalista, especialmente cuando varios de ellos poseen acciones de Big Tech por valor de millones. Pero sean cuales sean las críticas que los políticos estadounidenses hagan sobre el impacto de Facebook en casa, el gobierno de Estados Unidos no duda en usar Facebook para promover sus propias políticas imperialistas en el exterior.

Un plan de intervención financiado por Estados Unidos

En octubre de 2013, el National Endowment for Democracy (NED), una agencia gubernamental creada por la administración Reagan, contribuyó con casi \$ 300,000 al Instituto Nacional Democrático (NDI) para un programa llamado *Venezuela: Capacitación mejorada y habilidades de comunicación para activistas políticos*. El NDI también se fundó bajo la administración Reagan, como un brazo internacional del Partido Demócrata, junto con su homólogo republicano, el Instituto Republicano Internacional. Sin embargo, los dos grupos a menudo trabajan juntos y apoyan a muchos de los mismos actores y objetivos en el extranjero.

La NED sigue siendo la agencia matriz de ambos grupos y recibe casi todos sus fondos de los contribuyentes. Aunque el NED y el NDI reclaman su independencia del gobierno de los Estados Unidos, ambos son responsables de sus actividades ante el Congreso, que sigue sujeto a las exigencias de la Ley de Libertad de Información. (FOIA)

La indignación por la supuesta intervención rusa en las campañas electorales estadounidenses no ha cesado. ¿Entonces, ¿por qué se le permite al gobierno de los Estados Unidos participar

en un comportamiento partidista explícito en el extranjero?

En la descripción del programa, la NED dice que el gobierno venezolano ha intentado controlar los "principales medios de comunicación" del país, utilizándolos como una herramienta para presionar a sus ciudadanos. Como resultado, la NED informa que los opositores y "los activistas políticos tienen considerables dificultades para comunicarse con los ciudadanos, así como para organizar y movilizar a sus partidarios". En contraste, la NED describe las redes sociales como "menos vulnerables a las restricciones gubernamentales y [...] una herramienta útil para los activistas políticos independientes en Venezuela que desean difundir mensajes y organizarse".

Si bien la NED describe cuidadosamente a estos activistas como independientes, está claro que este programa fue diseñado para activistas y miembros del partido asociados con la organización paraguas de la oposición, la Mesa Redonda por la Unidad Democrática o la MUD (Mesa de la Unidad Democrática).

Formada en 2008, la MUD sigue siendo el bloque más grande de partidos de oposición en Venezuela, buscando unificar a los partidos de oposición existentes detrás de un candidato de consenso para oponerse a los miembros del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), el partido de Chávez y de Maduro, durante las elecciones. Campañas. Entre los principales partidos que la integran se encuentran Primero Justicia, Causa Radical, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, que aún incluye a Juan Guaidó, el líder opositor respaldado por Estados Unidos que intentó derrocar a Maduro de manera no democrática, e incluso por la fuerza, y que algunos países reconocen como el líder legítimo de Venezuela.

Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, y la victoria presidencial de su sucesor Nicolás Maduro el mes siguiente, la oposición comenzó a trazar estrategias para las elecciones municipales de diciembre de 2013 y, lo que es igualmente importante, para las elecciones legislativas de 2015. La NED informa que aunque los medios de comunicación siguen siendo la clave de la organización política contemporánea, la oposición estaba mal preparada con respecto al "uso de las redes sociales y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC)".

En respuesta, la NED financió al NDI para brindar varios servicios a la oposición venezolana.

Primero, NDI planeó y organizó “un Seminario Fuera de las Fronteras de Venezuela sobre el Uso de Tecnología y Redes Sociales para la Concienciación y el Compromiso Ciudadano”. Además, NDI ha creado una 'caja de herramientas virtual' alojada en un sitio correspondiente llamado Red Innovación, un sitio también financiado por NED, que ofrece 'un curso personalizado de desarrollo de capacidades en línea sobre una variedad de temas relacionados con la' innovación política '. El sitio y sus cursos permanecen activos.

b4,b6

NED Grant No. 2013-020
Attachment A, Project KK
Page 1

ATTACHMENT A

VENEZUELA: IMPROVED TRAINING & COMMUNICATION SKILLS FOR POLITICAL ACTIVISTS

U.S. GRANTEE:	National Democratic Institute for International Affairs	
DATES OF PROJECT:	October 1, 2013 - September 30, 2014	
AMOUNT:	Direct Costs:	\$239,838
	Indirect Costs:	\$ 55,172
	Total Costs:	\$295,050

I. BACKGROUND

Political activists in Venezuela confront increased threats, intimidation, and abuses of power by state institutions, as well as restrictions on their ability to present alternative views to citizens. Given the government’s control of mass media, and increased use of state resources to mobilize and intimidate voters, political activists have particular challenges in communicating with citizens as well organizing and mobilizing supporters. Social media in Venezuela has proven less vulnerable to government restrictions and can be a useful tool for independent political activists in Venezuela to disseminate messages and organize. However, many local political activists have limited exposure to ICT best practices and are in need additional technical assistance and support in order to effectively use of social media and other information and communications technologies (ICTs) to overcome the challenges they face in Venezuela. During the past 14 years, Venezuela has experienced profound political and institutional changes as late president Hugo Chavez launched a “Bolivarian Socialist Revolution” which he used to align the functions of the state with his political objectives. Chavez dismantled democratic principles such as the separation of powers; concentrated power in the executive through constitutional referenda to permit indefinite presidential re-election; created new state agencies designed to reduce the power of elected regional and local leaders; nationalized companies and industries—notably oil production and media outlets; and used state funds in support of his Bolivarian partisan agenda. In the process, he increasingly merged his political party, the United Socialist Party of Venezuela (*Partido Socialista Unido de Venezuela*, PSUV) with official state entities, while continuing to compete in regular electoral processes, implemented by the National Electoral Council (*Consejo Nacional Electoral*, CNE), which is dominated by rectors aligned with the PSUV. The abuse of power and disregard for rule of law and democratic principles -- even of procedures in the constitution adopted in 1999 under Chavez -- have continued under his successor Nicolas Maduro. Then Vice President Maduro assumed the acting presidency after Chavez’s death in March contrary to the established constitutional procedures for succession but with the authorization of the PSUV-controlled Supreme Court. The opposition has presented legal challenges calling for a re-running of the April 14 presidential elections in response to the irregularities they and independent organizations witnessed. The challenges are under review by that same court, which is expected to uphold Maduro’s narrow victory. While already benefitting from regulations requiring private as well as state-owned media to broadcast government messages, PSUV leaders have recently taken steps to further limit access to mass media for individuals and groups seeking to present alternative positions. They also have stepped up threats against opposition leaders including opening legal prosecutions against two prominent leaders, Leopoldo Lopez and retired General Antonio Rivero. With no requirement for transparency or accountability for oil revenues, the government directs state resources not just for social programs but also for explicit partisan purposes. For example, using vehicles from state-owned businesses to transport voters to the polls on election-day and deploying campaign advertising for the PSUV in government buildings and enterprises. As a result, those seeking to present alternative views are

